

ANÁLISIS PROPUESTA PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.101, CON EL OBJETO DE  
APLICAR CONTRA LOS OCUPANTES IGNORADOS DE INMUEBLES LA MEDIDA PRECAUTORIA DE  
RESTITUCIÓN ANTICIPADA DE INMUEBLES Y EL PROCEDIMIENTO MONITORIO ESTABLECIDO EN  
VIRTUD DE LA LEY N° 21.461

Se nos ha hecho llegar un borrador de proyecto que propone facilitar la restitución de la propiedad urbana raíz a sus dueños, cuando aquella sea ocupada ilegalmente ignorándose la identidad de aquellos que la habitan. De acuerdo al análisis normativo de la propuesta, el tema está regulado hoy en los siguientes cuerpos legales:

- a) Por una parte, el artículo 2195 inciso 2º del Código Civil define la acción de "precario" como la "tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato por ignorancia o mera tolerancia del dueño"
- b) Por la otra, la referida modificación a la ley N° 18.101, del año 2022, habilitó, en su artículo 18-K, la aplicación del nuevo procedimiento monitorio a las acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y la acción de precario.
- c) Sin embargo, lo anterior se ve limitado con la exigencia procesal para iniciar una acción de precario, que consiste en dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 254 N°2 del Código de Procedimiento Civil y lo exigido en el número 1º del artículo 18-A de la Ley N° 18.101, al formular la demanda judicial, esto es, la individualización del demandado.

De acuerdo a los proponentes, por la naturaleza de la acción de precario, la identificación del o los ocupantes ilegales es diferente a la individualización de un arrendatario, ya que no existe ningún tipo de relación contractual con el legítimo dueño del inmueble que se intenta restituir. Este hecho afecta el ejercicio de la acción, al transformarse en una exigencia adicional al demandante en

conseguir la individualización de alguna persona que esté habitando la propiedad a fin de sostener jurídicamente la demanda y practicar las notificaciones correspondientes. Dado lo anterior, la carga de la prueba para la parte demandante es la de probar que es el dueño o propietario, que no existe ningún vínculo convencional u otra fuente de las obligaciones con el ocupante y que se acredite la tenencia material de una cosa ajena por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Sin embargo, la acción termina frustrándose previamente al no contar con un requisito previo, esto es, la individualización de un demandado que se desconoce.

Dado lo anterior, se propone establecer una excepción al artículo 254 N°2 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 18 A N°1 de la ley 18.101, con el objeto de resguardar el ejercicio del derecho prescrito en el artículo 18 K, referido a las acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y a la acción de precario, evitando dilatar o entorpecer la legítima aspiración de recuperar el inmueble por parte del dueño, aun cuando desconozca la identidad de los ocupantes.

La modificación implicaría modificar la ley 18.101. Nuestra visión es que el proyecto viene a complementar, desde una perspectiva civil, el nuevo proyecto contra la usurpación recientemente aprobado en el Senado. El problema que busca solucionar este nuevo proyecto, que es el impedimento de poder individualizar a los demandados en los casos de precario, es nuevo (menos de un año, por publicación de modificación de la ley), pero no por eso menos relevante.

## **Medidas temporales y urgentes por crisis fronteriza**

La situación en la frontera con Perú se ha tornado crítica por la inacción de la actual administración de tomar decisiones en situación de emergencia. A su vez, se comparte la necesidad de dar una respuesta que sea humanitaria, especialmente considerando que Perú no acepta a ciudadanos venezolanos que no tienen una visa para entrar a su país.

Para ello, y tomando como referencia la experiencia pasada, donde se realizaron 26 vuelos de expulsión, 10 de ellos a Venezuela, de los cuales 6 fueron en aviones FACH, y 9 vuelos humanitarios a Haití, es que se proponen dos soluciones que se pueden implementar en 72 horas.

- 1) Fijar una ruta terrestre de vuelta a Venezuela por países que no soliciten visado a ciudadanos venezolanos:

Tanto Bolivia como Brasil no solicitan un visado para que ciudadanos venezolanos ingresen a sus fronteras, por lo que, gestionando un salvoconducto en el consulado venezolano en Chile, pueden rápidamente, financiado por organizaciones internacionales u organizaciones religiosas que defienden a clandestinos, ir en bus en la ruta Arica – Iquique – Colchane – Bolivia – Brasil – Venezuela. Esta medida toma 93 horas de viaje.

- 2) Establecer una ruta aérea:

El gobierno venezolano ha realizado 6 vuelos de retorno de sus ciudadanos desde Chile a su país de origen, por lo que las gestiones son realizables y se debe trabajar la validación de identidad, las autorizaciones de salida por parte del Servicio de Migraciones, las cuales deberían tomar minutos solo validando con PDI que no exista orden de arraigo porque es inentendible que nieguen la salida de clandestinos de Chile, y el país caribeño solicita colaboración con el combustible, lo que es una oferta

bastante mejor que continuar con niños durmiendo a la intemperie mientras los adultos se arrojan piedras con la policía peruana. En ese sentido, el vuelo tiene una duración de aproximadamente 6 horas.

Como se observa, la posibilidad se ha concretado en ocasiones anteriores, por lo que seguir presionando a la frontera con Perú, o seguir esperando sin sentido solo genera mayor tensión y demuestra la falta de voluntad y capacidad de la actual administración de devolver a quienes ingresan clandestinamente, aún cuando quieren salir voluntariamente de nuestro país.

## **PROYECTO DE LEY**

### **QUE MODIFICA PLAZO DE INVESTIGACIÓN EN CASOS QUE INVOLUCREN A IMPUTADOS**

#### **ADOLESCENTES Y ADULTOS**

##### **I. ANTECEDENTES**

La ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, fue publicada recientemente, el 13 de enero de 2023 (“LRPA”).

La LRPA vino a implementar una serie de modificaciones en materia de responsabilidad penal adolescente, con la intención de reformular la administración y ejecución de la reglamentación aplicable a los delitos que cometen las personas menores de edad.

Dentro de dichos cambios, la ley 21.527 incluyó la modificación a la normativa procesal aplicable a los procedimientos en los que una persona adolescente participa de la comisión de un delito juntamente con personas mayores de edad.

De acuerdo con la normativa vigente hasta la publicación de la LRPA, si en un mismo procedimiento se investigaba la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendría lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. Es decir, el fiscal podrá investigar separadamente cada delito de que conociere o desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando ello resultare conveniente, y las acusaciones que deriven de dichas investigaciones podrán someterse a un mismo juicio oral o juicios diversos dependiendo de la conveniencia para el desarrollo del juicio y el derecho a defensa. La aplicación práctica de dicha norma hasta la fecha no había sido conflictiva y había una interpretación pacífica al respecto.

Sin embargo, en la nueva ley se requiere la acusación conjunta de todos los delitos y responsabilidades.

Dicha modificación, que todavía no entra en vigencia, se puede transformar en un gran obstáculo para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en las que se persiga la responsabilidad de personas adultas y adolescentes por los mismos hechos. Lo anterior, porque existen múltiples indagatorias de una mayor complejidad, que se asocian al actuar de bandas delictuales, en los que concurre esta hipótesis y requieren de un plazo de investigación más extenso que el contemplado respecto los adolescentes, el que en muchas ocasiones no es suficiente para evacuar las diligencias investigativas necesarias. En la actualidad, este problema se resuelve separando las investigaciones y acusando de manera separada, sin embargo, esto no se podría realizar de encontrarse vigente la Ley N° 21.527.

La nueva ley comienza a regir en forma gradual en plazos de 12, 24 y 36 meses desde su fecha de publicación, para las regiones que indica, conforme a su artículo primero transitorio.

## **II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY**

Los fundamentos específicos del proyecto de ley están dados porque la nueva normativa hace obligatorio la presentación de una acusación conjunta contra personas adultas y adolescentes, aplicando a ambos los límites que se consagran para los adolescentes. Dentro de esos límites, se contempla un plazo máximo de investigación de 6 meses desde la formalización de la investigación, con posibilidad de ampliación por un máximo de otros dos meses, mientras que el plazo máximo de investigación para el caso de infractores adultos es de dos años.

De esta manera, aun cuando las investigaciones se hayan separado conforme al artículo 185 del Código Procesal Penal, será obligatorio acusar de manera conjunta, debiendo cumplirse las normas que regulan la responsabilidad penal de adolescentes, que establecen un plazo de investigación mucho más acotado que aquel que rige para los adultos. La solución actual -de separar investigaciones y acusar de manera separada- ya no podrá aplicarse.

Una modificación como la propuesta en el presente proyecto de ley es consistente con el objetivo que se tenía presente al momento de presentar el mensaje de la LPRA, que era abordar los problemas de carácter práctico que ofrecía la tramitación conjunta de causas que contaban con personas imputadas adolescentes y adultas. Al respecto, el mensaje de dicho boletín (N. 11174-07) indicaba que *“la concurrencia de adultos y adolescentes en un mismo hecho delictivo provoca el problema de que ambas instrucciones y el respectivo juzgamiento se encuentran en una parte de sus contenidos sujetos a reglas diversas”*<sup>1</sup>, agregando además que *“la diversidad de plazos de instrucción y otros factores relevantes hacen que sea común la gestión separada, lo que ofrece problemas asociados a la compatibilidad e incidencia mutua de las diversas resoluciones”*<sup>2</sup> y se prefirió *“introducir una regla que somete el juzgamiento a una gestión conjunta por defecto, demandando una decisión razonada para la gestión separada.”*<sup>3</sup>

Por su parte, el Ministerio Público manifestó su postura en contra de dicha medida, a través del OFICIO FN N° 274/2018 de fecha 9 de abril de 2018<sup>4</sup>. En este documento se sugiere no realizar dicha modificación, *“puesto que se producirán problemas al establecer de manera obligatoria la acusación conjunta de los delitos y responsabilidades. En efecto, al aplicarse el artículo 185 del Código Procesal Penal y separar las investigaciones, por razones de conveniencia en la realización de las pesquisas, es muy probable que los tiempos sean diversos en una y otra investigación, y por tanto, el agotamiento de las diligencias se producirá en momentos diversos, surgiendo serios problemas al obligar la acusación conjunta.”*<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Página 10. Disponible en

[https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file\\_ley/8103/HLD\\_8103\\_749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393.pdf](https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/8103/HLD_8103_749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393.pdf)

<sup>2</sup> Ídem

<sup>3</sup> Ídem

<sup>4</sup> Formula observaciones al Proyecto de ley, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N°11174-07) y a las indicaciones presentadas.

<sup>5</sup> Páginas 14 y 15

En el mismo sentido, la Corte Suprema expresó sus reparos sobre esta reforma, a través de un oficio de fecha 24 de abril de 2019. En dicha presentación, se indica que *“el proyecto no aclara del todo cómo operará la competencia de los tribunales cuando un mismo procedimiento se siga contra personas menores y mayores de edad”*<sup>6</sup>, y se afirma que la disposición en comento es insuficiente por diversos motivos. En primer lugar, *“debido a que la agrupación o separación de investigaciones es una decisión facultativa del ente investigador y no puede ser el mecanismo decisivo para determinar la competencia”*<sup>7</sup> y, por otro lado, porque *“la regulación establecida en esta disposición resulta incompatible con la regulación establecida en los artículos 29 bis nuevo de la Ley N° 20.084 y 16 bis nuevo del Código Orgánico de Tribunales, pues si de estas normas interpretamos que la competencia de las salas especializadas para conocer de asuntos relacionados con responsabilidad penal adolescente es exclusiva, no se entiende cómo esta sala - que de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 20.084 debe conocer de la causa - podría intervenir también en el enjuiciamiento de los adultos perseguidos en ella”*.<sup>8</sup>

Dado todo lo anterior, se hace necesario mantener el actual inciso 2 del artículo 28 de la LRPA, que no genera, *per se*, problemas de compatibilidad de las resoluciones pronunciadas en diversas causas, ni tampoco en cuanto a los efectos de unas sobre otras. Además, en aquellos casos en que se considere que existe un riesgo de que dichas dificultades se produzcan, la disposición en comento no impide que éstas se sustancien conjuntamente cuando ello sea conveniente.

### **III. CONTENIDO DEL PROYECTO**

Dado lo explicado con anterioridad, el proyecto busca, a través de una modificación simple al Artículo 28 de la Ley 20.084, mantener el actual inciso segundo (que pasaría a ser el tercero), ya

---

<sup>6</sup> Página 12. Disponible en [https://www.bcn.cl/historiadela ley/fileadmin/file\\_ley/8103/HLD\\_8103\\_f1a0ad63af56380b5233d77bd3d1270e.pdf](https://www.bcn.cl/historiadela ley/fileadmin/file_ley/8103/HLD_8103_f1a0ad63af56380b5233d77bd3d1270e.pdf)

<sup>7</sup> Ídem

<sup>8</sup> Ídem



que se trata de una norma que no ha generado dificultades en su aplicación y tampoco ha ocasionado perjuicios en los derechos de las personas adolescentes infractoras. Dado que la ley 21.527 no ha entrado en vigencia, es posible introducir esta corrección con anterioridad a que genere efectos perniciosos.

En consecuencia, por estas consideraciones es que venimos en someter a consideración de este Honorable Senado, el siguiente:

### **Proyecto de Ley**

1. Sustitúyase el Artículo 28 de la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, por el siguiente:

Artículo 28.- Concurso de procedimientos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad.

Lo dispuesto en el inciso precedente no tendrá lugar en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 25 ter, debiendo en dicho caso darse estricto cumplimiento a lo previsto en el presente Título.

Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiere determinado la sustanciación conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto del menor, de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes.

Luz Ebensperger Orrego

Senadora